

La guerra que no dice su nombre

Arturo Anguiano*

Resulta aparentemente inexplicable que el presidente Felipe Calderón convirtiera la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en la estrategia fundamental de su gobierno, la que en los hechos ha condicionado el conjunto de la gestión estatal, convirtiéndose en el signo distintivo del panismo en el poder. Esa guerra no se le impuso a Calderón, no fue resultado de una crisis específica relacionada con algún salto cualitativo de la acción del crimen organizado que hubiera sucedido al tiempo que ocupaba Los Pinos y que requiriera, por consiguiente, sin remedio, cambiar en forma radical las prioridades gubernamentales. Estamos, más bien, ante una guerra que no dice lo que es, que se disfraza, que precipita al país en una situación dominada mayormente por el desasosiego y la incertidumbre.

Muy significativa resulta la demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa, algunos funcionarios civiles y militares de su gobierno y contra jefes narcotraficantes del poderoso *cártel* de Sinaloa, todos acusados de *delitos de lesa humanidad* en la pretendida guerra contra el crimen organizado que ha afectado gravemente a México durante los últimos cinco años. Con más de 23 mil firmas de respaldo, el abogado mexicano Netzaí Sandoval destacó el “contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos” (*La Jornada*, 26 de noviembre de 2011). Es, precisamente, el saldo

públicamente reconocido, hasta ahora, del desfalleciente gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) que en 2006 se impuso luego de un fraude electoral que anuló en definitiva las esperanzas democráticas suscitadas por la derrota, en el año 2000, del decadente régimen de la Revolución Mexicana, que durante más de 70 años sostuvo el monopolio del poder.

A pocos meses de las elecciones nacionales en vista a la sucesión presidencial de 2012, la situación política del país se caracteriza por la profundización de la descomposición política y la degradación social a causa, sobre todo, de la militarización y la *violencia ambiente* que el gobierno de Calderón ha puesto en práctica y estimulado desde el inicio de su gestión. La violencia verbal y publicitaria que Calderón desplegó en 2006, durante su campaña electoral como candidato a la Presidencia de la República, tuvo su desenlace

en la violentación de las elecciones mediante el fraude en las urnas, y se reprodujo en su brusca toma de protesta (en un Congreso en revuelta, forzado a escucharlo) y en sus primeros pasos ya como jefe del Estado, rodeado siempre en forma ostentosa por los militares (Anguiano, 2010a).

La pérdida de legitimidad de las instituciones estatales, acelerada durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), se ahondó con el controvertido resultado de las elecciones de 2006 y durante el gobierno de Felipe Calderón, que arrancó con un déficit de legitimidad y en una atmósfera política enturbiada por la persistencia patente de los viejos vicios característicos del antiguo régimen, simbolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el *PRI-Gobierno*, pretendidamente derrotado. Los llamados tres poderes de la *República ilusoria* que pervive en

* Profesor-Investigador de la UAM-Xochimilco.

México (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los poderes fácticos tales como las centrales patronales, la jerarquía eclesial católica y los medios masivos de comunicación, salieron mal librados de la larga ofensiva de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno de Distrito Federal, en la cual todos ellos se implicaron con el propósito de anularlo primero como candidato presidencial, y luego para derrotarlo en las elecciones. Pero también se evidenciaron por poner en práctica, propiciar o avalar la judicialización de la política y la criminalización de lo social (resistencias, organización y hasta formas de trabajo), que caracterizaron al primer gobierno pospriísta. Todo el poder del Estado y de la oligarquía del dinero, representados por un poder mediático avasallador y sin precedentes, no lograron empero reproducir ni garantizar el sometimiento resignado de amplias capas de la sociedad, de las clases, pueblos y comunidades que la componen. En general, abuso de poder, deslavamiento del Estado laico, intolerancia y represión contra disidentes y luchas sociales, fraude electoral, enriquecimiento desmesurado de pocos, sinónimo de precarización generalizada de la economía y una corrupción socializada reproducida en forma ampliada durante el derechista y ultramontano gobierno de Fox —alcanzando a todos los destacamentos de la clase política ampliada y sus partidos—, dejaron un país exhausto y en extremo polarizado en todos los terrenos.

En esas condiciones prácticamente caóticas (de ingobernabilidad según el nuevo léxico a la moda), Felipe Calderón inició el segundo gobierno del PAN en forma vacilante, desacreditado de entrada y con el pesado lastre del primer sexenio panista, que paradójicamente lo elevó a la cima del Estado al tiempo que lo dejó en la intemperie, desprotegido ante el enojo y la rabia de una sociedad mayoritariamente desilusionada y en desconcierto.

Legitimación por la guerra

De manera sorpresiva, sin que hubiera sido uno de los ejes de su programa o de su campaña por la Presidencia, Calderón lanzó su gobierno con un ataque frontal al narcotráfico, *declarándole la guerra* por medio de operativos militares que se reprodujeron a lo largo y ancho de la geografía nacional, sacando a las calles de las ciudades alrededor de 60 mil efectivos. Si bien el llamado crimen organizado había crecido desde los años ochenta, en realidad su existencia y sus implicaciones envolventes vienen de lejos, con muchas aristas y nunca fueron ajenas a los gobiernos, al aparato estatal ni mucho menos a la oligarquía del dinero. Funcionarios gubernamentales, policías, militares, agencias

aduanales, juzgados, bancos, etc., se vieron involucrados de distintas maneras y niveles con los cárteles de la droga, muchos de ellos integrados o comandados incluso por antiguos militares o policías (véase por ejemplo Osorno, 2009 y Ravelo, 2011). Estados Unidos y México establecieron relaciones conflictivas al respecto, involucrando de diversa forma a distintas instancias estatales de ambos gobiernos. Colaboraciones, desconfianzas, golpes bajos, infiltraciones y complicidades, muchas historias se han desarrollado (y no dejarán de desarrollarse) al respecto.

Se trata de un fenómeno que se enraizó en el país a través de los años debido en gran medida a la manera como la corrupción (incluso socializada) se convirtió desde siempre en un rasgo no sólo del régimen patrimonialista y su funcionamiento, sino en parte de la cultura priísta, de la cultura nacional, que ha arraigado duradera y hondamente en nuestro país. Se liga asimismo a la economía desigual y las estrategias neoliberales que han pauperizado a amplias capas de la población, condenándolas al desempleo (en particular a los jóvenes, donde se ubican cerca de ocho millones de “ninis”, que ni estudian ni trabajan), dejándolas sin expectativas.

Así, queda claro que la existencia del narcotráfico ha sido en efecto un fenómeno persistente en la realidad mexicana que, por lo demás, se caracteriza por sus vinculaciones y derivaciones internacionales cada vez más diversificadas y extensas. Combatido en forma errática por los distintos gobiernos, en realidad su crecimiento explosivo coincide y es parte de la mundialización neoliberal del capitalismo, de la apertura irrestricta de los mercados que no dejan de asumir un carácter planetario. El mercado de la droga, como el de las armas o la economía informal, son formas perversas del capitalismo que, sin embargo, generan enormes ganancias. De hecho, los cárteles del narcotráfico tienen el doble carácter de asociación criminal y empresa capitalista, y de ahí sus vinculaciones fundamentales (sus complicidades clandestinas) con otras empresas formales como los bancos requeridos para la “legalización”, el lavado de los flujos de ganancias de aquéllos y su consiguiente reciclamiento. Se trata, entonces, de un problema global que no puede resolverse en un país como México, que no es más que una estación de paso hacia el mercado voraz al que la mayoría de sus productos son dirigidos: Estados Unidos.

Por ello resulta aparentemente inexplicable que el presidente Felipe Calderón convirtiera la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en la estrategia fundamental de su gobierno, la que en los hechos ha condicionado el conjunto de la gestión estatal, convirtiéndose

en el signo distintivo del panismo en el poder. Esa guerra *no se le impuso* a Calderón, no fue resultado de una crisis específica relacionada con algún salto cualitativo de la acción del crimen organizado que hubiera sucedido al tiempo que ocupaba Los Pinos y que requiriera, por consiguiente, sin remedio, cambiar en forma radical las prioridades gubernamentales. Estamos, más bien, ante una guerra que no dice lo que es, que se disfraza, que precipita al país en una situación dominada mayormente por el desasosiego y la incertidumbre. Es una *apuesta* de Calderón preñada de consecuencias devastadoras y de largo plazo (Anguiano, 2010b; Osorno, 2009: 303).

Sobre todo, lo que ha sido ampliamente criticado, la pretendida guerra contra el narcotráfico, sólo apunta a lo más evidente que es la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sin atacar las causas de fondo que podrían dismantelar a ese negocio rentable (Ravelo, 2011).

Es, entonces, una suerte de huida hacia adelante, de fuga ante una *situación de crisis política* acarreada por la manera fraudulenta como se convirtió en Presidente de la República y la consiguiente crisis de legitimidad de las instituciones estatales que trajo consigo, que profundizó. Esta “guerra del poder”, como advirtió el Subcomandante Insurgente Marcos, la hizo Calderón “para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad” (Chabat, 2010; Aguilar y Castañeda, 2009: 13). Es otra forma de la política del Estado (Aguirre Rojas, 2011), una expresión degradada de la incapacidad de formular alternativas a la crisis estatal que no cesa.

Seguridad, inseguridad y miedo

El viraje hacia la guerra fue al inicio un elemental lance en busca de reconocimiento a través de acciones de fuerza, sacando a la calle al Ejército revestido ilegalmente con funciones policíacas (condenando de entrada a las distintas policías y a todo el aparato de procuración de justicia que parecieron como incompetentes y sospechosos) (Carrillo Olea, 2011: 200), pero de inmediato la situación se le fue de las manos al Presidente, y la violencia impuso su propia lógica arrolladora.

Proclamando el objetivo prioritario de *restablecer la seguridad* que sus propias acciones no han dejado de empeorar y generalizar, en realidad solamente busca deses- peradamente un consenso social, un reconocimiento que no alcanza, sino todo lo contrario. Operaciones judiciales fallidas, criminalización de la disidencia y las resistencias sociales, enfrentamientos frecuentes y casi siempre ines-

perados entre las fuerzas paramilitares (cárteles de la droga) y militares (incluida la Marina, también empujada a la guerra fuera de su ámbito natural y sus funciones), redes y operaciones militares selectivas y masivas, torturas y desapariciones forzadas, han dejado *una larga estela de violaciones reiteradas de los derechos humanos*, que en lugar de legitimar al gobierno han potenciado el desprestigio de las fuerzas armadas, las cuales invariablemente aparecen como arbitrarias, prepotentes, turbias y por encima de legalidad (Human Rights Watch, 19 de noviembre de 2011).

El gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), así, le apostó a la *seguridad* que convirtió en el signo definitivo de su sexenio, canalizando recursos económicos y de todo tipo cada vez más desproporcionados (como lo señala el Sub Marcos en el texto citado), con lo que introduce una tendencia inédita que será muy difícil revertir y que no dejará de tener consecuencias duraderas y de fondo tanto en el carácter de las fuerzas armadas como en su papel a futuro en el Estado. Pero más que una guerra para rescatar e imponer la seguridad perdida en ciertas regiones o estados sensibles por las acciones del crimen organizado, lo que ha hecho el Presidente es *generalizar la inseguridad en todo el país*.

La presencia masiva del Ejército en las calles de las ciudades y en todo tipo de lugares altera la vida de la gente, que más que sentirse protegida se siente amenazada y sufre toda clase de controles, ultrajes y represalias sin que disminuya la presencia igualmente amenazante y letal del crimen organizado. La arbitrariedad, los montajes y las mentiras de los militares y del gobierno (verdaderos *performances* como dice Diego Osorno), reforzados con el aval indiscriminado y apabullante de los medios de comunicación, son otra cara de la guerra de Calderón que, en el fondo, se ha dirigido a *expandir el miedo*, a generar entre distintas capas sociales un *consenso temeroso* ante la ausencia de un consenso social efectivo. Pero mientras más avanza la guerra, incluso las clases privilegiadas van resintiendo sus consecuencias, las que no dejan de entrelazarse con una economía en extremo polarizada y raquítica que si bien los ha enriquecido, va de la crisis al estancamiento. Más todavía cuando los crímenes y los trasiegos de droga no se detienen y las víctimas de la sociedad y las violaciones de los derechos humanos se multiplican.

El Estado aparece en consecuencia como el *administrador de la inseguridad impuesta por el miedo*. El presidente Calderón parece haber aprendido de la experiencia de George W. Bush quien, a través de pretendidas amenazas catastróficas, propaganda mediática orquestada y mentiras

de Estado, impuso una guerra contra Irak que le permitió asentar y acrecentar su poder (revestido de mayor violencia e ilegalidad) en Estados Unidos y en el planeta, bajo la promesa de la gestión de la inseguridad asentada en el miedo (Rancière, 2009: 124).

El propósito central de la guerra de Calderón —como lo apunta Sergio Rodríguez Lascano (2011a y 2011b):— “no es acabar con el narcotráfico, sino destruir el tejido de la sociedad. Paralizar por el temor, el miedo. Gobernar por medio de estos instrumentos”¹. Ya el anterior gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desarrolló una ofensiva contra los movimientos sociales —y en general contra toda resistencia y oposición—, imponiendo su criminalización y recurriendo a formas represivas masivas —como en Atenco y Oaxaca en 2006 (CCIODH, 2008)—, características de la guerra de baja intensidad, que de Chiapas las fue extendiendo a otros estados. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, Calderón ha desarrollado en tanto política de Estado la *promoción del miedo y la parálisis*, esto es el *conformismo*, el sometimiento resignado, la *inseguridad como modo de vida que requiere la protección estatal* y, por consecuencia, la intervención y la cotidiana presencia masiva y generalizada de las fuerzas armadas (Fazio, 17 de octubre de 2011). Las luchas reivindicativas contra la explotación, la precarización y el despojo, el rechazo a las mascaradas democráticas de la clase política y las exigencias de libertades usurpadas, no caben en un México militarizado (Alvarado y Zaverucha, 2010), sujeto a reglas arbitrarias y un estado de sitio virtual. La vida nacional se trastoca en una atmósfera catastrofista reproducida noche y día por los medios (con su alcance cada vez más avasallador) y los gobiernos, dirigida a arrinconar a los distintos sectores sociales, a forzarlos a posponer sus demandas y acciones para dejar actuar libremente al gobierno en su guerra cada vez más envolvente, cada vez más invasora de la geografía del país, o correr el riesgo, claro, de sumarse a la lista de damnificados colaterales.

La guerra contra el narcotráfico es solamente una de las guerras del gobierno, pues por todas partes lleva también a cabo una auténtica *guerra social* contra las condiciones de vida y el empleo, contra las comunidades despojadas, de mil maneras, de tierras y recursos naturales en favor del capital global, contra los migrantes nacionales

¹ El Subcomandante Marcos (2011) escribe: “¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de ‘sálvese quien pueda’? De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos... y jugosas ganancias. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente”.

y extranjeros, contra los jóvenes, las mujeres y quienes piensan diferente, contra los pueblos indios que no dejan de resistir recreando sus condiciones de organización y convivencia colectivas².

Estado policiaco y resistencias

La centralidad de la guerra del gobierno por fuerza conlleva un endurecimiento del autoritarismo, la *legalidad a modo* (¿la justicia?), las libertades acotadas y la violación recurrente de los derechos humanos. Como siempre, el *Estado de derecho* se deja como una simple aspiración a futuro, mientras el *Estado de excepción* y sus reglas arbitrarias se justifican por la situación de guerra, instaurada como fallida forma de legitimación de un régimen político que hace agua por todos lados. La Constitución, las leyes, las normas y la justicia se violentan más que nunca y el conjunto de las instituciones estatales prosiguen su acelerada degradación.

Avanza una suerte de “Estado penal de control a medida que se reduce el Estado social”, como señala Rodríguez Lascano. Aunque en México difícilmente puede decirse que hubiera existido en algún momento un auténtico Estado social, lo cierto es que desde los ochenta se fueron desmontando prestaciones, logros y reformas sociales que mal que bien posibilitaron durante cierto tiempo no pocas seguridades (prestaciones laborales, apoyos materiales y subsidios al ritmo que imponían las relaciones clientelares y corporativas) y, por lo mismo, una sobrevivencia de amplias capas de la población muy por encima de la precarización generalizada que el capitalismo neoliberal ha acarreado. Parodiando a Rancière (2009: 125), podemos decir: “Ahí donde la mercancía reina sin límites..., la forma de consenso óptimo es la que está cimentada por el miedo de una sociedad agrupada en torno al Estado guerrero”; cuando el Estado “mínimo” abandona sus funciones de intervención social y deja libre curso a la ley del capital, aparece “el Estado reducido a la pureza de su esencia, o sea el Estado policiaco”. Y remata contundente: “La comunidad de sentimiento que sostiene este Estado, y que administra en su provecho, es la comunidad del miedo”.

La criminalización de resistencias y luchas sociales y la supuesta guerra contra el narcotráfico están agudizando la crisis del Estado y el régimen político que —como vemos— se alejan cada vez más de una reconfiguración democrática; abandonaron en definitiva la búsqueda de la estabilidad

² Resulta ilustrativo el Informe Bourbaki, *El costo humano de la guerra por la construcción de un monopolio del narcotráfico en México (2008-2009)*, en el sitio web: <movimientoporlapaz.mx>.

asegurada por procesos políticos libres y optaron por reafirmar la dominación revestida con la protección burda y amenazante del Ejército. Tratan de imponerse mediante la gestión del desorden y la inseguridad.

Pero el miedo promovido desde arriba está siendo vencido en todas partes debido a la indignación que brota abajo ante los métodos de la guerra y sus consecuencias sociales devastadoras. Se van rehaciendo nuevas solidaridades y redes sociales que en las peores condiciones y a contracorriente denuncian las campañas de desinformación y manipulación de medios de comunicación amalgamados al poder y develan sus mentiras, sus montajes y fines ocultos. En este sentido abonó la propuesta de la mencionada primera carta del Sub Marcos, quien retomó la campaña de *No más sangre* lanzada por varios caricaturistas encabezados por Rius, emplazó a la clase política, organizada en distintos partidos, a dejar de apostar al desastre en su disputa por el poder en 2012, y propuso la posibilidad de un gran movimiento plural que pudiera detener la guerra de Calderón.

La movilización nacional que ha articulado el poeta Javier Sicilia luego del asesinato de su hijo Juan Francisco y de tres de sus compañeros en Morelos el pasado mes de marzo —que fue la gota que derramó el vaso de la rabia contenida—, comenzó bajo la forma de un Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad (MNPJD) con claros ecos zapatistas. Una primera manifestación multitudinaria el 6 de abril, sin precedente en Cuernavaca, fue seguida por la Marcha del Silencio desde ese lugar hacia a la ciudad de México, reuniendo una gran concentración plural en el Zócalo el 8 de mayo. Luego se realizaron caravanas cargadas de simbolismo, atrayendo no sólo a inconformes sino igualmente a familiares y numerosas víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Primero se recorrió el centro y el norte del país rumbo a Ciudad Juárez (el “epicentro del dolor”), realizando una reunión nacional que desembocó en la firma de un Pacto Nacional por la Paz (Casasús, abril-septiembre de 2011). Más tarde hacia el sur y el sureste del país, encontrando en Oventic a los zapatistas. Recorrieron 26 estados donde se encontraron con numerosas víctimas y familiares que se sumaron a miembros de comunidades eclesiales de base, agrupaciones ciudadanas y de derechos humanos, defensores de migrantes y desaparecidos, etcétera. En fin, lo más controvertido en los primeros siete meses a partir de su inicio fue cuando el Movimiento por la Paz entabló dos encuentros con el presidente Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec (junio y octubre 2011) y luego con representantes del Poder Legislativo.

En general, su objetivo fue visibilizar y reivindicar a nivel nacional a las miles de víctimas de la guerra que habían sido condenadas por el gobierno como criminales o cómplices del narcotráfico, romper en cierta medida el “cerco de la criminalización” y caminar hacia la justicia³. El gobierno de Felipe Calderón, por supuesto, no ha dejado de refrendar su estrategia militar e incluso ha radicalizado su lenguaje, insistiendo en que no puede suspenderla, pues el *narco* ha penetrado policías, gobiernos, etc., aunque sin realmente hacer nada al respecto; el gobierno norteamericano actúa con plena libertad en nuestro territorio a través de sus múltiples agentes y operaciones. El triunfalismo ciego y sin sentido del Presidente choca con la tremenda realidad (Ravelo, 2011: 277).

No cabe duda de que el movimiento encabezado por Javier Sicilia ha sido la respuesta más importante lograda en contra de la guerra gubernamental, su lógica y sus secuelas devastadoras. Alentó sin duda muchas manifestaciones que por todas partes exigen el cese de la guerra, el cambio de la estrategia gubernamental, y reivindican (nombran) a las víctimas al tiempo que combaten de más en más las violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército y las distintas fuerzas de seguridad. Se incrementan, incluso, las denuncias en el sentido de que no solamente no han disminuido los crímenes y acciones de los cárteles del narcotráfico, sino que se han disparado incontroladamente los robos, los asaltos, las extorsiones, los secuestros y toda suerte de crímenes cometidos por las propias fuerzas que debieran encargarse supuestamente de la seguridad.

Las movilizaciones del MNPJD, no obstante su alcance y simbolismo, no han logrado cristalizar en un auténtico movimiento político social articulado y con visos de permanencia. Tampoco han podido superar las dificultades que traban la formación de una nueva organización, así fuera bajo la forma de una red de organizaciones y ciudadanos. Sus dirigentes incluso hablan ya de una “crisis de crecimiento” y de la necesidad de repensar su camino hacia la resistencia civil (Gil Olmos, 20 de noviembre de 2011). De cualquier forma, el Movimiento por la Paz es uno de los componentes principales de las resistencias y luchas que no dejan de desarrollarse en México, en las peores condiciones, contra todas las guerras del Estado y la oligarquía del dinero. No han cesado de brotar a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, lo mismo en comunidades y pueblos que en grandes ciudades y hasta en los centros de trabajo sujetos al despotismo desenfrenado (“desregulado”) del capital. Una verdadera revuelta cotidiana que, sin embargo, se reproduce fragmentada, las más de las veces aislada, en forma desigual, pero persistente (vid Anguiano, 2010a). El problema es justamente cómo encontrar la manera de

³ Toda la información sobre los “diálogos” se encuentra en <movimientoporlapaz.mx>.

vertebrar esas luchas, de potenciarlas y unificarlas, de ligar sus reivindicaciones singulares con demandas políticas generales como el fin de la guerra contra el narcotráfico, la reivindicación de los derechos humanos y las libertades democráticas, así como el combate contra la acción arrasadora del capitalismo neoliberal.

La atmósfera de inseguridad y el temor reproducidos por la guerra y la militarización no dejan de dificultar la articulación de las luchas y resistencias. La coyuntura electoral por la sucesión presidencial, que de hecho se ha iniciado, estará sobredeterminada por esta situación y no se perciben propuestas unificadoras como la otra campaña que el EZLN puso en práctica en 2006. Los partidos políticos, la clase política toda, se alistan para las campañas bajo la lógica del autismo social, como si nada sucediera de extraordinario en el país. Javier Sicilia ha adelantado que, sin cambios, llegaremos a unas “elecciones de la ignominia”. Ya en las elecciones intermedias de 2009, núcleos de intelectuales promovieron el voto nulo en rechazo al conjunto de los partidos y la clase política. No dejarán de surgir propuestas y debates sobre opciones de fondo abajo y a la izquierda.

Mientras tanto, la guerra contra el narcotráfico, las guerras contra la sociedad no cesan. El Ejército y la Marina, que no están hechos ni autorizados para realizar labores policíacas ni combatir al crimen organizado, siguen en las calles haciendo lo que saben hacer, para lo que fueron entrenados y formados: combatir con una lógica de guerra, de aniquilamiento, a un enemigo difícil de ubicar, de delimitar, de destruir. Fuerzas armadas que debieran defender la soberanía, resguardar nuestras fronteras nacionales (tan porosas, tan franqueables), se encuentran en las calles en una *guerra civil* comandada por un presidente que no ha alcanzado la legitimidad, que acumula fracasos ante un fantasma que se potencia con sus golpes, y que se alista ante el inevitable hundimiento de su partido. Todas las «fuerzas del mal» convocadas y puestas en movimiento en forma perversa, lo arrastrarán en su debacle. Sólo queda prepararse para impedir el hundimiento de la nación dando a luz alternativas de cambio reales y duraderas.

Referencias

- Aguilar, R. y Castañeda, J. G. (2009). *El narco: la guerra fallida*. México: Santillana-Punto de Lectura.
- Aguirre Rojas, C. (2011). “La guerra, la política y la ética. Reflexiones sobre una carta”. *Rebeldía*, (77).
- Alvarado, A. y Zaverucha, J. (2010). “La actuación de las fuerzas armadas en la seguridad pública en México y Brasil: una visión comparada”. En Alvarado y Serrano, *Los grandes problemas nacionales. Tomo XV. Seguridad nacional y seguridad interior*. México: El Colegio de México.
- Anguiano, A. (2010a). *El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos*. México: Era.
- Anguiano, A. (2010b). “La revuelta cotidiana”. *Rebeldía*, (75).
- Anguiano, A. (2011). “Guerra, política, resistencias y alternativas (en torno al debate sobre ética y política)”. *Rebeldía*, (78).
- Carrillo Olea, J. (2011). *México en riesgo. Una visión personal sobre un Estado a la defensiva*. México: Grijalbo.
- Casasús, M. (abril-septiembre de 2011). “La Caravana del Consuelo: origen y recorrido”. *Memoria*, (251).
- Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (2008). *Informe de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco*. Barcelona: CCIODH.
- Comité Cerezo (2011). *Saldos de la represión en México, 2009-2011. Una guerra contra el pueblo*. Recuperado de: <www.comitecerezo.org>.
- Chabat, J. (2010). “La respuesta del gobierno de Felipe Calderón al desafío del narcotráfico: entre lo malo y lo peor”. En Alvarado, A. y Serrano, M., *Los grandes problemas nacionales. Tomo XV. Seguridad nacional y seguridad interior*. México: El Colegio de México.
- Fazio, C. (17 de octubre de 2011). “Terrorismo estatal e impunidad”. *La Jornada*.
- Gil Olmos, J. (20 de noviembre de 2011). “El Movimiento por la Paz busca nuevos líderes”. *Proceso*, (1829).
- Human Rights Watch (19 de noviembre de 2011). *Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México*. Recuperado de <jornada.unam.mx>.
- Informe Bourbaki. *El costo humano de la guerra por la construcción de un monopolio del narcotráfico en México (2008-2009)*. Recuperado de <movimientoporlapaz.mx>.
- La Jornada* (26 de noviembre de 2011). Recuperado de <jornada.unam.mx26denoviembrede2011>.
- Osorno, D. E. (2009). *El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco*. México: Random House Mondadori/De Bolsillo.
- Rancière, J. (2009). *Moments politiques*. París: La Fabrique Éditions.
- Ravelo, R. (2011). *El narco en México. Historia e historias de una guerra*. México: Grijalbo.
- Rodríguez Lascano, S. (2011a). “2010: de la crisis de dominio a la organización independiente”. *Rebeldía*, (76).
- Rodríguez Lascano, S. (2011b). “La clase política y la guerra”. *Rebeldía*, (77).
- Subcomandante Insurgente Marcos (2011). “Apuntes sobre las guerras (carta primera a Don Luis Villoro Toranzo)”. *Rebeldía*, (76).